**CABA, 11 de enero de 2023.**

**Documento elaborado por el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires**[[1]](#footnote-1)**, en respuesta al llamado a contribuciones sobre el derecho a la educación, avances y desafíos de la Relatora Especial Farida Shaheed.**

1. El derecho a la educación cuenta con una importante protección normativa convencional y constitucional nacional y local[[2]](#footnote-2). Sin embargo existe una importante brecha entre el reconocimiento de derechos, el acceso a los mismos y las políticas públicas educativas.

1. Resulta significativo precisar que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante CABA o la Ciudad) es un distrito que comparativamente cuenta con recursos abundantes respecto al resto del país. En cuanto al derecho a la educación, si bien es alta la cobertura y calidad en servicios educativos, se presentan situaciones estructurales de vulneración de derechos, situaciones de desigualdad y discriminación que afectan a los sectores sociales en mayor situación de vulnerabilidad.
2. A su vez, de los últimos años a la fecha los tribunales locales se han convertido cada vez de manera creciente en una arena de resolución de conflictos y de configuración de políticas públicas, de esta manera existen importantes casos judiciales centrados en torno al derecho a la educación.

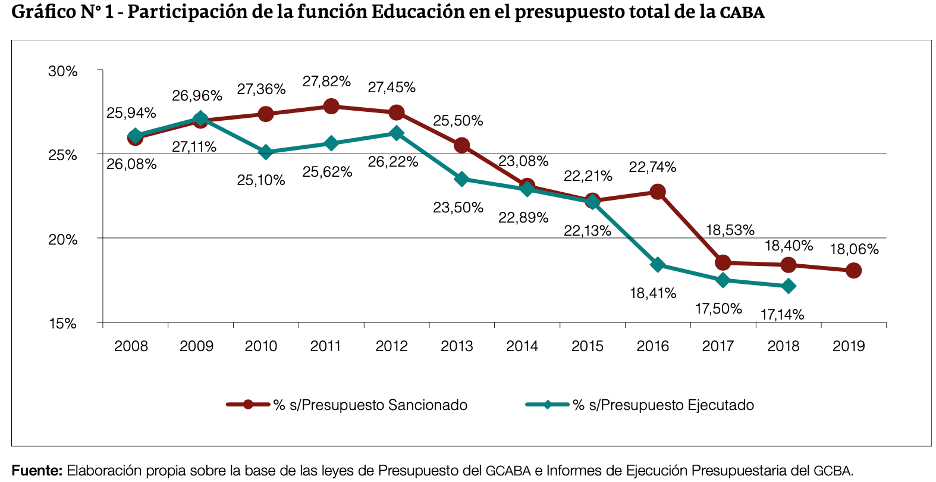
1. En virtud de estas consideraciones, de las funciones que desarrolla este Ministerio Público y a fin de contribuir con el Mandato de la Relatora Especial sobre el derecho a la educación, es que se brindará información de manera más detallada a las preguntas 5 y 6 del cuestionario, brindando información específica sobre la CABA.

**PREGUNTA 5: Acceso a la justicia y derecho a la educación en la Ciudad Buenos Aires.**

1. En esta pregunta se proporcionará información relativa a una selección de causas judiciales locales emblemáticas relativas al derecho a la educación en la CABA, agrupadas en dos ejes temáticos.
2. **Déficit de vacantes escolares adecuadas**
3. En el 2006 la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) inició una acción de amparo colectivo en función del déficit de vacantes en el nivel inicial de educación, la cual dejaba por fuera del sistema de educación pública a más de 6000 niñas y niños pequeños de la Ciudad[[3]](#footnote-3).
4. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la demanda y condenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) a cumplir con la sentencia. Luego la Cámara de Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario (CAyT) confirmó la sentencia y en esta instancia se arribó a un acuerdo en el año 2011 que fue firmado tanto por ACIJ como por el Ministerio Público Tutelar[[4]](#footnote-4) y el GCBA y que fue presentado ante el Tribunal Superior de Justicia. Del mismo, es importante resaltar que el GCBA reconoció la existencia de niñas y niños sin vacantes escolares, y sus obligaciones al respecto. Para ello se comprometió a resolver esta exclusión que estaba generando a través de obras para la creación de nuevas vacantes, lo que incluía asimismo la obligación de presentar informes periódicos.
5. Más allá del amplio reconocimiento judicial en torno al derecho a la educación, más de diez años después, el GCBA no ha realizado las obras suficientes y necesarias para acompañar la demanda de vacantes. Por otra parte, según señalan diversos actores de la causa, existen numerosas trabas en cuanto al acceso a la información de manera oportuna y completa por parte del GCBA[[5]](#footnote-5).
6. Respecto de vacantes en nivel primario y medio, en el 2016 un legislador de la Ciudad inició una causa[[6]](#footnote-6), en el cual se solicita asegurar el acceso y otorgamiento de todas las vacantes solicitadas en escuelas públicas de gestión estatal, en particular mediante la construcción y puesta en funcionamiento de nuevas escuelas y de nuevas aulas en los establecimientos educativos existentes.
7. En 2019 el juzgado de primera instancia hizo lugar al amparo[[7]](#footnote-7), determinando que el GCBA no garantiza vacantes accesibles a la comunidad educativa generando una distribución inequitativa de oferta de escuelas de gestión pública, implicando un trato discriminatorio hacia los estudiantes que viven en los distritos más postergados. Esto luego fue confirmado parcialmente en noviembre de 2021 por la Cámara de Apelaciones[[8]](#footnote-8).
8. De esta causa se puede dar cuenta de parte del fenómeno que complejiza la situación de la insuficiencia de vacantes adecuadas. Por un lado porque el GCBA, a través del Ministerio de Educación, oferta vacantes que no son accesibles para niñas, niños y adolescentes porque son en establecimientos muy lejanos a sus hogares, produciendo un desarraigo de su centro de vida, dificultando el acceso real a las mismas o sobrecargando a las familias a dedicar gran parte de su día en traslados hacia y desde los colegios, u otorgando vacantes de jornada simple cuando lo solicitado por las familias era jornada completa. Asimismo pone en evidencia que la falta de vacantes adecuadas se concentra en los barrios vulnerables de la CABA, principalmente en la zona sur de la Ciudad.
9. A pesar de estas dos causas colectivas de gran relevancia, cabe destacar que aún persiste el déficit estructural de vacantes escolares en establecimientos públicos de gestión estatal, sobre todo a nivel inicial. Tal es así que en los últimos años frente a situaciones individuales por falta de vacantes se inician tanto gestiones administrativas por parte de los organismos de acceso a la justicia, entre ellos el MPD[[9]](#footnote-9), como se inician acciones de amparo con el objeto de garantizar el acceso al sistema público de la Ciudad.
10. **Derecho a la participación estudiantil y derecho a ser oídos[[10]](#footnote-10)**
11. La Constitución local, en su artículo 24 asegura la participación de la comunidad y la democratización en la toma de decisiones en el sistema educativo. Sin embargo, como se puede observar a través de diversas acciones de amparo promovidas en la justicia local estos derechos no han sido cabalmente respetados.
12. En 2017 la Asesoría Tutelar Nº1 inicio un amparo[[11]](#footnote-11) en relación a una importante reforma educativa denominada “Secundaria del Futuro”, sin el dictado de un acto administrativo de alcance general que lo regule, garantizando previamente el procedimiento necesario para que los estudiantes tengan acceso a una información veraz y adecuada sobre la reforma educativa, y que se garantice el derecho de opinión, estableciendo espacios de deliberación en tiempo oportuno y razonable, que les permitan expresarse. En otro expediente[[12]](#footnote-12) se peticionó que no se lleven adelante reformas educativas que no sean el resultado de una ley dictada por el poder legislativo local.
13. Asimismo, desde el MPD CABA[[13]](#footnote-13) se patrocinó a un grupo de padres de alumnos de escuelas porteñas, en carácter de integrantes de la comunidad educativa, solicitando que se intime al GCBA a brindar información completa sobre el programa educativo que pretende aplicar, se ordene la convocatoria a un proceso participativo institucional y vinculante, y se establezca un control judicial del proceso de participación.
14. Por otra parte, en los últimos años también han llegado a sede judicial las situaciones referidas a “tomas de colegios”, encabezadas principalmente por estudiantes de nivel medio quienes llevan adelante reclamos vinculados al derecho a la educación, tanto por mejoras en las condiciones edilicias de las escuelas; por la situación relacionada al derecho a la alimentación, por la mala calidad de las viandas alimentarias y las insuficientes becas para comedores; por cambios relativos a la implementación de programas de pasantías y prácticas profesionales de carácter obligatorio, entre otras cuestiones[[14]](#footnote-14). Cabe destacar que estos reclamos son objetos de diversas acciones de amparo que tramitan ante el Fuero CAyT de la Ciudad.
15. En torno al acceso a la justicia, cabe señalar que desde el MPD CABA se ha representado a las familias en una serie de expedientes[[15]](#footnote-15) en torno al derecho a la participación estudiantil. Desde el GCBA, en el marco de proceso judicial, se dictaron diversas resoluciones y protocolos determinando las pautas para que las conducciones escolares lleven a cabo en caso de la ocupación pacífica de un establecimiento escolar.
16. Sobre este tema resulta de interés mencionar la utilización de políticas punitivas por parte del ejecutivo local frente a diversas tomas de colegios que fueron llevadas adelante recientemente durante los meses de septiembre y octubre del 2022.
17. A través de la Procuración General, la Ciudad ha presentado denuncias e iniciado causas vinculados a veinte y dos establecimientos educativos de nivel medio[[16]](#footnote-16). Cumpliendo con una resolución vigente[[17]](#footnote-17), cada institución escolar elevó al Ministerio de Educación, un listado de padres, madres y/o responsables de los alumnos que fueron citados por las autoridades escolares para retirar a sus hijos/as de cada institución escolar y que no lo hicieron. El Ministerio Público Fiscal ha notificado a dichas familias de la existencia de causas contravencionales en su contra[[18]](#footnote-18) [[19]](#footnote-19).

**PREGUNTA 6: Una mirada al presupuesto educativo y las políticas públicas en la Ciudad de Buenos Aires desde los principios de igualdad y no discriminación.**

1. Como ha sido mencionado en la introducción de este informe, la CABA cuenta con mejores indicadores educativos que el promedio del país, en parte por la extensa tradición de inclusión educativa y las políticas desarrolladas a lo largo de décadas; por ser el distrito más rico del país y por contar con un alto presupuesto público en comparación a otras provincias y distritos. Sin embargo, las políticas educativas públicas educativas han contribuido a la consolidación de la desigualdad educativa y territorial. En este sentido resulta importante mencionar que en la zona sur de la Ciudad se concentran los peores indicadores sociales, tanto de pobreza, desempleo, déficit habitacional, nivel de ingresos, entre otros. Cabe destacar que es también allí donde se ubican gran parte de las villas, asentamientos y barrios populares de la CABA. A nivel de indicadores educativos la desigualdad se observa en menor cantidad de años de escolarización para el total de la población, menor cantidad de personas que completaron el nivel secundario y mayores niveles de analfabetismo.
2. A continuación se presentan las principales problemáticas en cuanto a las políticas públicas educativas[[20]](#footnote-20).
3. Desde el año 2008 se observa la tendencia a la **reducción y subejecución del presupuesto educativo**, como puede observarse en el gráfico a continuación[[21]](#footnote-21).



1. Esta tendencia afecta de manera especial a ciertas áreas como lo es la inversión en **infraestructura y mantenimiento**, ya que por un lado no se realizan las obras comprometidas tanto en los programas gubernamentales ni tampoco se ejecutan las acciones provenientes de las demandas judiciales. Esto se vincula estrechamente al profundo déficit de vacantes que fue abordado de manera detallada en la pregunta anterior.
2. Se evidencia un fenómeno de privatización de la educación, en tanto las transferencias al sector privado mediante **subsidios a escuelas de gestión privada** representan en promedio la mitad del presupuesto de política educativa, sin contar los gastos en personal de esta cartera. Asimismo, este es un programa que cuenta con un alto nivel de sobre-ejecución constante año a año, es decir que destina mayores fondos a los presupuestados. En tal sentido la acción estatal en lugar de priorizar y garantizar el acceso a la educación de niñas y niños con menores recursos, subsidia la elección de una escuela privada de quienes por un lado tienen mayores recursos económicos, y que además cuentan con la posibilidad de asistir a escuelas de gestión estatal, que también como se ha mencionado en la zona norte de la Ciudad cuando con condiciones educativas comparativamente mejores.
3. A modo de cierre, como ha señalado la Defensora General de la Ciudad, Dra. Marcela Millán[[22]](#footnote-22), es importante pensar la problemática de la educación en clave de la tensión permanente entre las normas constitucionales —que consagran igualdad, diálogo y participación— y la realidad de la educación pública de la Ciudad, signada por la desigualdad, la ausencia de diálogo, la exclusión y la falta de participación.
4. En este sentido, la Defensora General señaló que la desigualdad se verifica en dos dimensiones. Una cuantitativa, que se refleja en la asignación y la subejecución del presupuesto educativo en la Ciudad, situación que ha empeorado durante 2022 y que da cuenta de la política regresiva del GCBA en materia educativa, salvo en subsidios a educación privada. En términos cualitativos, las asimetrías se profundizan por la falta de diálogo y la clausura de los espacios de participación que sostiene el Gobierno local, cuyos protocolos de actuación y la implementación de políticas punitivas y represivas destinada a la comunidad educativa han motivado una intervención inédita del MPD ya que es la primera vez que este Ministerio Público actúa en materia penal en cuestiones educativas, ya que los y las defensoras del fuero penal están representando a los padres de los y las estudiantes que participaron de las tomas, como fue detallado a través de las actuaciones.

1. El Ministerio Público de la Defensa es un organismo autónomo del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que garantiza el acceso a la Justicia, asignando Defensores Públicos que asisten a los habitantes en sus reclamos contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como también a aquellos que sean imputados por contravenciones, faltas o delitos penales. Asimismo, ha tenido desde sus inicios un papel protagónico en esta garantía de acceso a la justicia en materia de Derechos Humanos en general y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en particular. Esta tarea es concentrada a través de diferentes medios: reclamos administrativos, acciones para acceder a la información, acciones individuales y colectivas referidas a diferentes derechos (derecho a la vivienda, al acceso a los servicios públicos, a la salud, a la educación, a la alimentación adecuada, etc.). www.mpdefensa.org.ar – didh@mpdefensa.gob.ar [↑](#footnote-ref-1)
2. Constitución Nacional: artículos 14 y 74, inc. 18 y 19. Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, artículos 10, 23 y 24. Ley Nacional de Educación N 26.206, Ley local de Educación N 898, entre otras. En esta línea se destaca especialmente el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que establece las obligaciones del Estado local de “asegurar y financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior”. [↑](#footnote-ref-2)
3. “Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia contra GCBA sobre amparo (art. 14 de la Constitución de la CABA)”, Expte. No 23360/2006- 0, juzgado CAyT No 3, secretaría No 5, iniciada el 18/12/2006. [↑](#footnote-ref-3)
4. El Ministerio Público Tutelar integra el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tiene como misión principal el control de legalidad de los procedimientos, la promoción del acceso a la justicia y el respeto, protección, promoción y satisfacción de los derechos y garantías de niñas, niños y adolescentes y personas que requieren apoyos en el ejercicio de su capacidad jurídica. [↑](#footnote-ref-4)
5. Mabel López Oliva y María Lucila Passini. El derecho a la educación de los niños desde la mirada del Poder Judicial: el caso de la CABA. Revista Educación e igualdad, número 23 de la Revista Institucional del Ministerio Público de la Defensa. Véase en https://revistampd.mpdefensa.gob.ar/sites/default/files/publicaciones-pdf/revista23.pdf. [↑](#footnote-ref-5)
6. “Del Corro Patricio y otros c/ GCBA s/ amparo”, (art. 14 de la CCABA), Expte. N° 36966/2016. [↑](#footnote-ref-6)
7. www.saij.gob.ar/fa19370015?utm\_source=newsletter-mensual&utm\_medium=email&utm\_term=mensual&utm\_campaign=jurisprudencia-provincial [↑](#footnote-ref-7)
8. Este fallo ratificó la condena al GCBA a que adopte las medidas necesarias e inmediatas a fin de cesar en su omisión de asegurar y garantizar el acceso a la Educación Primaria y Secundaria en determinados distritos escolares y que informe, publique y actualice en la página oficial del GCBA cuáles son las cincuenta y cuatro escuelas nuevas construidas por esta gestión (2016/2019), como así también la cantidad de vacantes disponibles por distrito escolar. [↑](#footnote-ref-8)
9. Cada año, durante las distintas fechas correspondientes al calendario de inscripciones escolares el MPD ofrece a través de sus distintas áreas asesoramiento y acompañamiento a las familias para que puedan acceder a vacantes escolares. A modo de ejemplo ver: https://www.mpdefensa.gob.ar/comunicacion/mas-noticias/educacion-reclamos-falta-vacantes-y-preinscripcion-el-ciclo-lectivo-2022 [↑](#footnote-ref-9)
10. Parte de esta sección se ha elaborado con información producida por la Secretaría Letrada de Derecho a la Educación perteneciente a la Secretaría General de Derechos Humanos y Sociales del MPD CABA. [↑](#footnote-ref-10)
11. “Asesoría Tutelar CAyT Nº 1 c/ GCBA s/ amparo”, Expte. Nº 34.839/2017-0 [↑](#footnote-ref-11)
12. “Ordaz, Gonzalo Rodrigo c/ GCBA s/ amparo-Educación”, Expte. Nº 34.734/2017-0 [↑](#footnote-ref-12)
13. “Llobet, Valeria Silvana y otros c/ GCBA s/ amparo -Educación”, Expte. Nº 36.563/2017-0 [↑](#footnote-ref-13)
14. Ver: <https://www.argentina.gob.ar/noticias/preocupacion-por-la-persecucion-del-gobierno-porteno-contra-jovenes-y-adolescentes-que-se>; <https://www.pagina12.com.ar/485245-tomas-en-las-escuelas-cuales-son-y-que-reclaman-los-alumnos>; <https://www.telam.com.ar/notas/202210/606540-estudiantes-escuelas-tomadas-cuestionan-piden-dialogo.html> [↑](#footnote-ref-14)
15. “Heredia, María Fernanda c/ GCBA s/ amparo” Expte. Nº A26685/2017-0. Juzgado CAyT Nº 4 Secretaría 7. [↑](#footnote-ref-15)
16. A modo de ejemplo se señalan algunos de los nombres de los establecimientos educativos y los datos de cada denuncia: Lengüitas - ENS en Lenguas Vivas Spangenberg - CUIJ: J-01-00341973-4/2022-0 – MPF 770154; Colegio Mariano Acosta - CUIJ: J-01-00340855-4/2022-0 - MPF 769361, Escuela de Música Juan Pedro Esnaola - CUIJ: J-01-00343188-2/2022-0 – MPF771283. En caso de resultar de interés se puede remitir la información completa. [↑](#footnote-ref-16)
17. La Resolución N°643/MEGC/18 determina las Pautas de Convivencia Escolar que deberá cumplir el equipo de conducción en caso de producirse la toma de establecimientos, en especial párrafo 5 punto 4 del anexo respectivo que impone la obligación de enunciar los datos de los padres o de quienes ejerzan la responsabilidad parental que no hayan retirado a los jóvenes a su cargo del establecimiento educativo, dejando constancia de los motivos y de haberles hecho saber que la responsabilidad sobre el alumno recaerá exclusivamente sobre el adulto que ejerza la responsabilidad parental, mientras dure la situación y en el caso de ingreso/egreso del alumno al establecimiento educativo.   [↑](#footnote-ref-17)
18. Estas conductas fueron encuadradas en el Artículo 60 del Código Contravencional que sanciona el “Ingresar o permanecer contra la voluntad del titular del derecho de admisión”. http://www.saij.gob.ar/1472-local-ciudad-autonoma-buenos-aires-codigo-contravencional-ciudad-lpx0001472-2004-10-28/123456789-0abc-defg-274-1000xvorpyel [↑](#footnote-ref-18)
19. Actualmente, los legajos se encuentran en etapa de investigación. Sin perjuicio de ello, la Defensoría Oficial interviniente (MPD CABA)  realizó un planteo que derivó en la fijación de una audiencia de excepción por cuestión de competencia, en el marco de la causa CUIJ: J-01-00341973-4/2022-0 –Lengüitas - ENS en Lenguas Vivas Spangenberg – que tramita ante el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas nro. 27 de la CABA. La pretensión de la defensa es que se remita el legajo para que intervenga la justicia especializada. Corresponde señalar que las causas no se encuentran disponibles para la consulta pública en función de su primigenio estadio procesal.     [↑](#footnote-ref-19)
20. Entre los informes consultados se destacan los siguientes: “Análisis del Presupuesto ejecutado en Áreas Sociales 2021” de julio de 2022 y “Presupuesto Educativo en la CABA” de diciembre de 2019, ambos elaborados por la Dirección de Investigaciones de la Secretaría Judicial de Investigación de la Secretaría General de Planificación del Ministerio Público de la Defensa de la CABA. [↑](#footnote-ref-20)
21. María Laura Barral y Gabriel Suban. “El sistema educativo en la Ciudad de Buenos Aires: desigualdad y desinversión”, en Revista Educación e igualdad, número 23 de la Revista Institucional del Ministerio Público de la Defensa. Febrero 2022. Véase en <https://revistampd.mpdefensa.gob.ar/sites/default/files/publicaciones-pdf/revista23.pdf>. [↑](#footnote-ref-21)
22. https://www.mpdefensa.gob.ar/comunicacion/noticias-institucionales/el-mpd-llevo-a-cabo-la-i-jornada-la-defensa-publica-la-ciudad [↑](#footnote-ref-22)